

El Cronista Comercial, pág. 7, 10/11/15

Una gran devaluación tendría fuerte impacto negativo en la producción y el empleo

Por Alejandro Vanoli

Presidente del BCRA

Todos los días podemos ver y escuchar cómo diversos economistas del establishment apelan a un lenguaje críptico, a la distorsión argumental o a omisiones evidentes con el fin de impedir que sus auditorios determinen cuál es su verdadero pensamiento.

Se habla así de "unificación cambiaria" o de "levantar restricciones" como eufemismos para evitar la palabra devaluación, que es lo que realmente proponen.

Se dice a la vez que "el dólar oficial no le importa a nadie" o que los precios de la economía ya tienen incorporado el valor de un dólar ilegal.

Por supuesto, esto es falso. Y no hace falta ser economista para advertir la falacia. Sólo basta con tener sentido común. En los últimos doce meses se tramitaron por el mercado único y libre de cambios (MULC) aproximadamente 45.000 millones de dólares por pagos de importaciones. Y todo el comercio exterior se concreta a través de ese mercado único. Es la misma paridad cambiaria por la cual se demandan dólares para ahorrar o gastar en el exterior, sólo que en este caso se añade un pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias que luego se reintegra.

¿Qué ocurriría entonces si se decidiera instrumentar una brusca devaluación? En primer lugar, todos los bienes importados sentirían el impacto, porque hoy, como dijimos, ingresan a través del MULC. Claramente, habría aumento de precios no sólo en bienes suntuarios como a veces presume el imaginario común cuando se habla de productos que provienen del exterior, sino en todos los que incluyen componentes importados. Más aún: se registrarían, como lo demuestra la historia argentina, incrementos preventivos vinculados con el grado de dolarización que exhibe la economía local.

En otras palabras, tendría lugar una fuerte transferencia de recursos desde los sectores de ingresos fijos y las franjas más vulnerables de la sociedad hacia los segmentos más concentrados, los grandes exportadores y las corporaciones posicionadas en divisas. La experiencia histórica evidencia que una devaluación del 40% en la Argentina provoca de manera directa un incremento en los precios de entre el 20% y el 40%. No hace falta ser



economista para advertir quién se perjudica y quién se beneficia con una medida de esta naturaleza. Es decir, la política cambiaria no es neutra. Hay decisiones que favorecen a sectores poderosos y otras que apuntan a preservar la estabilidad financiera y cambiaria con el fin de proteger la producción y el empleo.

Por otra parte, no debe desatenderse para el análisis el escenario global. La caída en el precio de las materias primas y la reducción del comercio mundial somete a los países emergentes a tensiones cambiarias. La mejor alternativa para enfrentarlas y atenuar el impacto en los precios, especialmente en naciones con historia de alta inflación, es la estrategia de flotación administrada.

La Argentina está transitando un período de estabilidad en materia financiera y cambiaria, consolidación del desendeudamiento externo, recuperación económica y aumento de los depósitos y el crédito. La inflación, además, verifica una tendencia descendente, con una reducción de doce puntos porcentuales, en buena medida a partir de las políticas de estabilidad cambiaria. Por cierto, hay un recorrido por delante para ampliar el acceso del sector productivo al financiamiento, continuar bajando la inflación, mejorar la productividad y reducir costos para quienes producen y exportan con políticas fiscales y medidas específicas.

Dejar de lado este camino para embarcarse en el atajo devaluatorio no sólo es una solución inaceptable sino que provocará daños irreparables, sin que se logre incrementar las exportaciones. Es un extraño canto de sirena, porque ninguno de los que solapada o abiertamente la postula atina a explicar sus beneficios.

El desafío entonces es no caer en la trampa que nos abriría las puertas a una recesión, más inflación y pérdida de empleos, sino perseverar en las políticas que tienden a garantizar el desarrollo con inclusión, estimular la producción y proteger las fuentes de trabajo.